

**República de Colombia**



**Rama Judicial**

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA  
SECCIÓN CUARTA  
SUBSECCIÓN “B”**

Bogotá, D. C. quince (15) de julio de dos mil veinte (2020)

**Radicación No.:** 250002315000-2020-02331-00  
**Acto objeto de control :** DECRETO 129 DE 16 DE JUNIO DE 2020  
**Autoridad Administrativa:** ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE  
**Medio de Control:** CONTRO INMEDIATO DE LEGALIDAD  
**Asunto:** NO AVOCAR CONOCIMIENTO

**Magistrada Ponente:**  
**Dra. NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA**

**A U T O**

---

Procede el Despacho a analizar la competencia para adelantar el procedimiento de control de legalidad inmediato del Decreto 129 de 16 de junio de 2020 expedido por el **Alcalde del MUNICIPIO DE RICAURTE** (Cundinamarca) en el marco de la declaratoria de calamidad pública decretada mediante el estado de excepción de emergencia sanitaria

**I. ANTECEDENTES :**

El alcalde del Municipio de Ricaurte (Cundinamarca) remitió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Decreto 129 de 16 de junio de 2020 con la finalidad de someterlo al control inmediato

*Radicación No.: 250002315000-2020-02331-00*  
**CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD**  
**MUNICIPIO DE RICAURTE**

de legalidad y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 20 de la Ley 134 de 1994 en concordancia con los artículos 136 y 185 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que por reparto correspondió a este despacho.

Al respecto, debe precisarse que el artículo 215 de la Constitución Política faculta al Presidente de la República para declarar el estado de excepción de emergencia siempre que ocurran las siguientes circunstancias, a saber:

**ARTICULO 215.** Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario.

(...)

Nótese que la Carta Superior autoriza al Presidente de la República a declarar el Estado de Emergencia ya sea económica, ecológica o social cuando se producen hechos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. Concordantemente, el legislador dispuso someter ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a control inmediato de legalidad las medidas de carácter general que se dicten en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepción en el lugar de expedición de dichas actuaciones, de acuerdo con lo reglado en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 “*Ley Estatutaria de los Estados de Excepción en Colombia*”, el cual prevé lo siguiente:

**Artículo 20.** Control de legalidad. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso

**Radicación No.: 250002315000-2020-02331-00**  
**CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD**  
**MUNICIPIO DE RICAURTE**

administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales.

Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.

Esa preceptiva normativa fue reproducida íntegramente en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 “CPACA”, solamente que adicionó la facultad del juez administrativo para aprehender de oficio el conocimiento del referido control para cuando la autoridad administrativa no remite la actuación.

De esa manera, el numeral 14 del artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo prescribe que el control inmediato de legalidad de los actos de carácter general expedidos por autoridades departamentales y municipales en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de los decretos legislativos expedidos en los Estados de Excepción serán de conocimiento en única instancia de los tribunales administrativos del lugar donde se expidan.

Fue así que, con base en las facultades otorgadas por la Constitución el Presidente de la República profirió el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020 por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días calendario invocando como fundamento que la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo Coronavirus (COVID – 19) y cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos negativos que se han venido evidenciando en la última semana, es un hecho que además, de ser una grave calamidad pública, constituye una grave afectación al orden económico y social del país , lo que ampliamente justifica que la situación a la que está expuesta actualmente la población colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el empleo, el abastecimiento de bienes básicos de la economía y

**Radicación No.: 250002315000-2020-02331-00**  
**CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD**  
**MUNICIPIO DE RICAURTE**

el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional, lo que torna urgente contar con las herramientas legales necesarias para enfrentar de manera eficaz la situación de pandemia, conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.

En virtud de lo anterior, el Alcalde Municipal de Ricaurte en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 1801 de 2016, la Ley 136 de 1994, y los Decretos presidenciales 749 de 28 de mayo de 2020 y 847 de 14 de junio de 2020 adoptó nuevas medidas administrativas para el mantenimiento del orden público del municipio de Ricaurte.

Conforme con lo antes expuesto, se desprende que si bien el Decreto constituye un acto administrativo de carácter general, lo cierto es que se trata de decreto que no se sustentó ni fue emitido en desarrollo de un decreto legislativo en desarrollo del estado de emergencia declarado en todo el territorio colombiano por el Decreto 417 de 17 de marzo de 2020, ello impide que ese acto sea objeto de control inmediato de legalidad por parte de esta jurisdicción.

Por consiguiente, resulta forzoso concluir que el aludido decreto municipal no es susceptible del control inmediato de legalidad, teniendo en cuenta que no cumple con uno los presupuestos dictados en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, en concordancia con los artículos 136 y 151 de la Ley 1437 de 2011, pues el control inmediato de legalidad procede frente a aquellas medidas de carácter general dictadas en ejercicio de funciones administrativas, como desarrollo de los decretos legislativos expedidos en el marco de un estado de excepción. Resulta claro que no es un acto administrativo propiamente dicho de los pasibles de control conforme lo indican las normas en citada.

**Radicación No.: 250002315000-2020-02331-00**  
**CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD**  
**MUNICIPIO DE RICAURTE**

No obstante, es importante aclarar que esta decisión de no avocar el conocimiento para examinar la legalidad del mencionado Decreto no comporta o produce los efectos de cosa juzgada material, como quiera que no se predicen los efectos procesales de dicha figura en cuanto a su inmutabilidad, vinculación y definición<sup>1</sup>, por cuanto es viable el control judicial ante esta jurisdicción, conforme al medio de control procedente y en aplicación del procedimiento regido en la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Por lo tanto, al no cumplirse con los presupuestos **para efectuar un control automático de legalidad** respecto del Decreto 129 de 16 de junio de 2020 proferido por el **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE** en los términos ya señalados, no se avocará el conocimiento en el asunto de la referencia.

En razón y mérito de lo expuesto, la SUSCRITA MAGISTRADA EN SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B,

## **RESUELVE**

**PRIMERO.- NO AVOCAR** conocimiento de control inmediato de legalidad del Decreto 129 de 16 de junio de 2020 proferido por el **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE** (Cundinamarca) por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional C – 100 de 2019.



**SEXTO.** - Una vez ejecutoriada esta providencia, POR SECRETARÍA SE **ORDENA DEJAR LAS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE ARCHIVO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN.**

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**NELLY YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA**  
**Magistrada Ponente**